

## La política exterior española en 1999

Felipe Sahagún  
Periodista.  
Profesor Titular de  
Relaciones Internacionales,  
Universidad Complutense  
de Madrid

Ninguna política exterior surge de la nada o se hace en el vacío. Es el resultado de una sucesión de decisiones personales condicionadas por comportamientos y percepciones anteriores, en unas estructuras y procesos de decisión determinados, con unos medios siempre limitados, al servicio de un régimen y de un programa políticos concretos, desde un Estado con unos atributos específicos y dentro de un sistema internacional siempre cambiante. El problema principal de la política exterior española hoy tiene que ver mucho más con los medios que con los fines. La concepción de esa política responde, en opinión de los principales observadores y protagonistas de la diplomacia española, a los intereses y a la realidad de España. Lo que no se corresponde con esa realidad son los medios para llevar a la práctica dicha política. España se ha integrado plenamente en la construcción europea, forma parte cada vez más activa de la sociedad internacional, tiene una presencia económica en el exterior en crecimiento geométrico y, sin embargo, mantiene prácticamente los mismos medios que tenía durante la época de aislamiento internacional. Si los Reyes Magos hubieran preguntado a los seiscientos y pico diplomáticos que siguen formando eso que, eufemísticamente, se llama en España la *carrera*, qué quieren para el siglo XXI, nueve de cada diez, con estas palabras o muy parecidas, habrían respondido: “que la intendencia siga”. Cada decisión puede explicarse desde una perspectiva diferente, pero sólo es posible comprender el gran cuadro integrando las distintas variables y pasando los hechos por el filtro del tiempo y de los resultados. Las principales novedades de la diplomacia en el siglo XX han venido de la mano de la explosión de las comunicaciones, de la multiplicación de los actores que intervienen en la definición y acción exteriores, y de la complejidad creciente de la política internacional. 1999 ha sido rico en ejemplos de esa complejidad en la política exterior española. Las fronteras entre competencias comunitarias y españolas se difuminaron todavía más con la entrada en vigor del Tratado de Amsterdam y del euro financiero. La solicitud de extradición del ex dictador chileno, Augusto Pinochet, por el juez español Baltasar Garzón complicó las relaciones con Iberoamérica, pero convirtió a España en un punto de referencia en la lucha por la universalización de los Derechos Humanos y contra la impunidad del crimen de Estado. La Unión Europea (UE) desbancó a la ONU como escenario principal del conflicto hispano-británico por la soberanía de Gibraltar y las autoridades gibraltareñas negociaron un acuerdo pesquero con las autoridades locales de Algeciras y La Línea de espaldas al Gobierno y a la Constitución. La acción exterior de las comunidades autónomas y de otros actores nacionales ha cobrado un dinamismo inusitado que, en general, refuerza la acción del Gobierno central pero en ocasiones la

entorpece. El ejemplo más polémico de 1999 fue el intento en julio del Legislativo autónomo vasco de ceder su sede de Vitoria al llamado "parlamento kurdo en el exilio" para reunirse. El Gobierno recurrió la iniciativa ante el Constitucional y el encuentro no se llegó a celebrar, pero la decisión complicó durante meses las relaciones entre Madrid y Ankara, en particular la negociación de la participación española en el desarrollo del sudeste de Anatolia, uno de los proyectos regionales más ambiciosos del mundo, con inversiones previstas de unos 3,5 billones de pesetas antes del terremoto de agosto de 1999. Turquía se convirtió en 1999 en el segundo cliente principal de la empresa CASA en el exterior y en uno de los diez clientes comerciales más importantes de España (Rubén Amón, *El Mundo*, 14.02.99). Razón poderosa para justificar el apoyo del gobierno español a la candidatura turca a la UE en contra de las reservas expresadas por los principales dirigentes del Partido Popular Europeo.

El ingreso definitivo en la nueva estructura de mandos de la Alianza Atlántica redujo casi a cero el margen de maniobra de España en guerras como la de Kosovo y los compromisos europeos en Defensa aceleran la necesidad de unas Fuerzas Armadas nuevas, multifuncionales y profesionales.

*“El problema principal de la política exterior española hoy tiene que ver mucho más con los medios que con los fines”*

Los limitados recursos dedicados a los ministerios de Asuntos Exteriores (142.000 millones) y de Defensa (965.000 millones) en los presupuestos del 2000 obligan a ser cada vez más selectivos en los compromisos que se adquieren. La oposición advertía en el debate parlamentario que “estos presupuestos reflejan la irrelevancia de España en política exterior, el escasísimo peso del presidente José María Aznar en los foros internacionales, la simbólica contribución en Kosovo y la nula participación en la crisis de Timor pese a nuestro permanente y, a veces, inquietante canto de hermandad con nuestros vecinos ibéricos, los portugueses” (*Diario de Sesiones*, 1999a). Al socialista Martínón Cejas sólo le faltó añadir que, durante los 13 años del PSOE en el gobierno, la situación no mejoró, sino todo lo contrario. La separación entre los ámbitos bilateral y multilateral de la acción exterior cada vez es más teórica que real. La política interior y la exterior dejaron de ser realidades separables hace muchos años. La lucha contra el terrorismo

de ETA explica la prioridad dada por el gobierno de José María Aznar al impulso del tercer pilar en la UE y a las relaciones bilaterales con Francia en el último año. La transición en Marruecos tras el fallecimiento de Hassan II en julio obligó a España a extremar su cautela respecto al referéndum del Sáhara, Ceuta y Melilla, las relaciones pesqueras, la migración y la estabilidad en el Mediterráneo Occidental. Los compromisos adquiridos en el Consejo Europeo de Tampere sobre inmigración y la mala coordinación del gobierno con su grupo parlamentario provocaron una de las batallas legislativas más importantes del año sobre la mal llamada Ley de Extranjería, que se cerró con la contundente derrota parlamentaria del Ejecutivo en el último Pleno de la legislatura, el 22 de diciembre de 1999.

Superado el mundo bipolar, la dimensión militar ha perdido fuerza, al menos en las relaciones interestatales, frente a las dimensiones financiera, comercial, tecnológica, humanitaria y cultural, pero ha adquirido una importancia mucho mayor la formación de grupos industriales multinacionales capaces de competir en el mercado global y de producir a precios asequibles las armas del siglo XXI. En esta línea pocas decisiones tan importantes para la política exterior y de seguridad española se adoptaron en 1999 como la integración de la empresa aeronáutica CASA en el grupo Ceuropeo EADS, dominado por la alemana DASA y la francesa Aérospatiale-Matra. Prueba de ello fue el viaje a Madrid para asistir a la firma del acuerdo, el 2 de diciembre, del primer ministro francés, Lionel Jospin, y del canciller alemán, Gerhard Schroeder. Coincidió con la ruptura de la tregua de ETA y ambos aprovecharon la visita para solidarizarse con Aznar en la lucha contra el terrorismo y expresar el apoyo de la UE contra ETA. Muchos estados han cedido o se han visto obligados a ceder parcelas de soberanía a actores supranacionales, regionales y locales, viejos y nuevos. España, como todos los países de su entorno, se está viendo arrastrada por estos procesos y no acaba de definir un proyecto de seguridad y política exterior propio y, a la vez, compatible con sus obligaciones multilaterales.

#### Antecedentes

En un año, incluso en un día, pueden cristalizar esfuerzos de generaciones que cambian definitivamente para bien o para mal una política. Sucedió en Westfalia (1648), Utrecht (1713),

Viena (1815), Versalles (1919), Postdam (1945), Roma (1957), Berlín (1990)... Sin embargo, estos vértices entre el declive y la recuperación o viceversa, sacudidas telúricas del mapa geopolítico mucho más importantes que cualquier programa o ideología, sólo son explicables desde el análisis histórico y comparado. En Westfalia fracasó el primer y último intento de política continental de España (Jover, 1999). Utrecht es el desmoronamiento de la vieja comunidad mediterránea hispánica, herencia aragonesa. En Viena queda prácticamente liquidado el imperio ultramarino español y comienza un largo período de marginación, aislamiento y/o neutralidad libre o forzada, punteada por incursiones sucesivas en las Antillas, Cochinchina, Marruecos, las Carolinas, Cuba y Filipinas, de nuevo Marruecos y las últimas colonias africanas. En los años treinta España se convierte en laboratorio de pruebas y escenario preferente de la confrontación entre las grandes potencias que desemboca en la Segunda Guerra Mundial. Con la dictadura de Franco, da igual el autor que elijamos, se impone una política exterior personalista, muy poco institucionalizada, pasiva o de reacción, continuista y pragmática en algunas de sus principales decisiones pero siempre rehén del dictador y de la supervivencia de su régimen (Calduch, 1993). Los gobiernos de Adolfo Suárez, en los primeros años de la transición, pusieron fin definitivo al aislamiento de España –siempre relativo– de siglo y medio largo, tratando de preservar, como ha señalado Fernando Morán (1990, 1980), un margen mínimo de maniobra o de autonomía. Marcelino Oreja, ministro de Exteriores en aquellos años, resume en cuatro apartados la acción exterior de Suárez: promoción de los Derechos Humanos con la firma de las Convenciones de la ONU e ingreso en el Consejo de Europa; desbloqueo de las relaciones con la Santa Sede; la desvinculación clandestina del vergonzante compromiso jurídico del 14 de noviembre de 1975 con Marruecos y Mauritania sobre el Sáhara; y la universalización de relaciones diplomáticas, salvo con Israel y Corea del Norte. España llamó a la puerta de la todavía Comunidad Europea y, aunque formalmente comenzaron las prenegociaciones el 28 de julio de 1977, la puerta no se abrió. Por decisión personal de Suárez, se aparcó el ingreso en la Alianza Atlántica para no atizar divisiones dentro de la UCD (Unión de Centro Democrático), el partido en el gobierno, y para no romper el consenso en política exterior. Se firmó un nuevo acuerdo con EEUU que respetó,

en lo esencial, la relación privilegiada de Franco con los gobiernos estadounidenses. Se sustituyó el viejo Pacto Ibérico con Portugal por un nuevo Tratado de Cooperación y se firmó una Declaración en Lisboa con el Reino Unido sobre Gibraltar. Se vendieron magníficamente, por último, las figuras del Rey y del propio Suárez en una Iberoamérica dominada todavía por las dictaduras en un intento de ir abriendo brechas democratizadoras en los escasos resquicios encontrados. Marcelino Oreja lamenta hoy tres cosas: no haber logrado antes el ingreso de España en la OTAN, no haber normalizado las relaciones con Israel, y no haber conseguido una Ley de Cooperación que diera sentido, orden y eficacia, a la política exterior española. Fueron, como en política interior, años de definición y de transacción. Se vendió democracia a cambio de reconocimiento.

A su llegada al poder, en 1982, el PSOE se encuentra con una España abierta ya a todos los países salvo a Israel, pero con enormes lagunas en Asia, el Este europeo y África; incorporada a la OTAN por Calvo Sotelo sin el apoyo de la izquierda ni de parte de UCD; parte ya de los principales tratados internacionales, salvo el Tratado de No Proliferación Nuclear, con una imagen, más virtual que real, de autonomía gracias a los escarceos de Suárez con Arafat, Fidel Castro y los no alineados, y unas negociaciones con la CE ralentizadas, cuando no bloqueadas, por el chantaje y el boicot permanente de Francia, cuya falta de cooperación en la lucha contra el terrorismo durante muchos años se convirtió, junto con el retraso económico, en el factor principal de inestabilidad de la naciente democracia. El PSOE no cambió nada esencial, pero avanzó, reforzó y mejoró todos los frentes anteriores. Desatascó, con medios legales e ilegales, las relaciones con Francia, completó las negociaciones con la CE en 1985 y, con la integración gradual en la Comunidad, cambió radicalmente tanto las prioridades como el proceso de toma de decisiones en la política exterior española. Desde el consenso sacó adelante las primeras y, por ahora, últimas directrices claras de política exterior y de seguridad en la Declaración de octubre de 1984. En ellas se fijaron, como objetivos, unas relaciones nuevas con la OTAN y con EEUU, la entrada en la Unión Europea Occidental (UEO), la integración plena en la CE y en el sistema monetario europeo, la negociación con el Reino Unido sobre Gibraltar, la defensa del desarme, la paz y los Derechos Humanos, y la autodeterminación del pueblo saharauí. El refe-

réndum de la OTAN, en marzo de 1986, es posiblemente el momento decisivo de la política exterior del PSOE y de la transición. Los gobiernos de Felipe González institucionalizaron en cumbres bilaterales, además, las relaciones con los países vecinos (Francia, Portugal y Marruecos) y con Alemania e Italia. Pusieron fin a la fórmula del alquiler en las relaciones militares con EEUU y forzaron la salida de los F-16 de Torrejón de Ardoz. Con el fin de reforzar el vínculo iberoamericano y hacerlo valer en la CE, se aprovechó el año 1992 -V Centenario, Olimpiada y Expo de Sevilla- para poner en marcha un proyecto de institucionalización en las cumbres iberoamericanas y dotar a las relaciones bilaterales con los países del hemisferio occidental de medios -hasta 15.000 millones de dólares en créditos ente 1986 y 1992- para consolidar aquel proyecto. Superada, aunque sólo parcialmente, la fase de indefinición sobre la OTAN, el principal talón de Aquiles de la etapa socialista, la política exterior española apoyó decididamente a EEUU en la intervención contra Irak en Kuwait y, por iniciativa personal de González,

apostó por la unificación alemana cuando todavía dudaban Margaret Thatcher y François Mitterrand. El presidente estadounidense George Bush premió aquellos gestos aceptando la celebración en Madrid, a finales de octubre de 1991, de la Conferencia de Paz para el Oriente Medio. Helmut Kohl agradeció aquella iniciativa con un respaldo económico decisivo en la Unión Europea de cuyas rentas España todavía se beneficia con los fondos de cohesión y otras ayudas.

Tras unos primeros meses de aproximación o tanteo en 1996, tristemente célebres por el choque frontal con Cuba, 1997 fue el primer año de política exterior del nuevo gobierno del Partido Popular. Los resultados principales, según Fernando Rodrigo (*Anuario Internacional CIDOB*, 1997, p. 29-41), fueron el cumplimiento de los criterios de convergencia para ingresar en la Unión Económica y Monetaria europea, la aportación española al reforzamiento del segundo y del tercer pilar de la UE en el Tratado de Amsterdam, la nueva iniciativa del ministro de Exteriores, Abel Matutes, sobre Gibraltar, la cumbre de la OTAN en Madrid en julio y el acuerdo de diciembre para el ingreso en la nueva estructura de mandos de la Alianza Atlántica a pesar de la tenaz oposición

británica y de las dificultades puestas durante muchos meses por Portugal. En 1998 España se incorpora al euro, José María Aznar desbloquea las relaciones con Cuba y Abel Matutes fuerza un endurecimiento de las relaciones con Gibraltar tras el incumplimiento del acuerdo de pesca. Se amplía el mecanismo de las cumbres con Turquía con carácter anual, se concreta la participación española en la nueva OTAN y se aprueba la participación en un eventual ataque aéreo contra Yugoslavia por la situación en Kosovo. La detención de Augusto Pinochet en Londres a petición del juez español Baltasar Garzón obliga al gobierno Aznar a optar entre dos principios tan importantes como la soberanía y los Derechos Humanos, y ensombrece las relaciones con Iberoamérica. España se vuelca en la ayuda a los países centroamericanos afectados por el huracán *Mitch*, aprueba el uso de las bases en los nuevos bombardeos estadounidenses sobre Irak y ofrece, sin respuesta, la posibilidad de una segunda Conferencia de Madrid para Oriente Medio (*Anuario Internacional CIDOB* 1998, p. 29-40).

#### Balance de 1999

Un hecho no por previsto fácil de controlar, la adaptación al euro, y tres hechos imprevisibles e incontrolables por el gobierno -la guerra de Kosovo, el proceso de extradición de Pinochet en el Reino Unido y el fallecimiento de los reyes Hussein de Jordania y Hassan II de Marruecos- condicionaron casi por completo la acción exterior española en el último año. Ningún factor ha influido tanto en la vida española, nacional e internacional, de los últimos doce meses como la reducción de los tipos de interés exigida por la incorporación al euro, que ha facilitado un crecimiento superior al 3,5%, pero ha reducido peligrosamente la competitividad de nuestras exportaciones en casi un 2,5% anual desde 1997 (*Financial Times Survey*, 1999). Kosovo no sólo ha sido la primera guerra de la OTAN, aunque sus dirigentes nunca la reconocieron como tal y siempre la calificaron de campaña aérea. Fue también la primera prueba decisiva del nuevo sistema de seguridad europeo en ciernes, en el que España acababa de entrar como miembro de pleno derecho. Puso en evidencia los riesgos de intervenir sin autorización del Consejo de Seguridad de la ONU y colocó a la diplomacia española en una situación delicada, fuera del centro de decisiones (el llamado Grupo de Contacto), obligada a optar

*“La política interior y la exterior dejaron de ser realidades separables hace muchos años”*

entre la integridad territorial (tan importante para un país amenazado de ruptura por los nacionalismos vasco y catalán) y el deber de injerencia humanitaria, dubitativa siempre entre sus compromisos europeos y sus obligaciones derivadas de la dependencia militar respecto de EEUU, cada vez menos coincidentes. Un equilibrio similar o más difícil exigió el boicot por los dirigentes chileno, Eduardo Frei, y argentino, Carlos Menem, de la cumbre iberoamericana en La Habana para no poner en peligro diez años de esfuerzos para levantar los cimientos de una futura Comunidad Iberoamericana de naciones y convertir a España en lo que hoy es: uno de los principales inversores del mundo en América Latina. Entre enero y junio de 1999, alrededor del 65% de los más de cuatro billones de pesetas invertidos por empresas españolas en el exterior, más del doble que en todo 1998, se destinaron a esta región (*El País*, "Negocios", 21.11.99, p. 14).

Si 1998 fue, en palabras del propio ministro de Exteriores, el año de Europa, 1999 no lo ha sido menos, aunque los principales titulares se los llevaron, por este orden, Kosovo, Timor Oriental, Chechenia, Cuba, Pinochet, Gibraltar, las sucesiones en Jordania y Marruecos, Javier Solana, los secuestrados españoles en otros países, la colaboración con Francia en la lucha contra ETA durante y después de la tregua, y la diplomacia de la Casa Real. Tras varios años de letargo, la *diplomacia real* recibió un fuerte impulso con las visitas de los Reyes al sur de África y a Cuba; el protagonismo del rey Juan Carlos en las ceremonias de devolución del canal de Panamá; los últimos contactos del monarca con Hussein de Jordania y Hassan II, y sus estrechas relaciones con los herederos, y la omnipresente actividad del príncipe Felipe en representación de España en cada relevo presidencial latinoamericano, en su estancia de cinco semanas en la UE para familiarizarse con los entresijos comunitarios y en Oriente Medio. El optimismo despertado en el Palacio de Santa Cruz por la victoria de Abdelaziz Buteflika en las presidenciales argelinas, boicoteadas por todos sus adversarios, no dio ningún fruto. Los contactos diplomáticos con Marruecos se intensificaron antes y después del fallecimiento en julio de Hassan II, pero la decisión marroquí de no renovar el acuerdo pesquero con la UE, caducado el 30 de noviembre, forzó el amarre de cerca de 500 barcos y dejó en el paro a miles de pescadores españoles. Retórica aparte, Aznar dedicó la mayor parte de sus esfuerzos en política exterior

en 1999 a abrir nuevos mercados para los empresarios españoles y asegurar los ya existentes; pilotar el Partido Popular Europeo hacia el centro, donde se ganan o se pierden las elecciones; consolidar el espacio ganado para los intereses nacionales dentro de la Unión Europea, y cumplir como aliado fiel de la OTAN en los Balcanes, comprometido en la defensa de la democracia y de los Derechos Humanos, con el menor coste para España. El resultado merece un notable alto o un sobresaliente, según el gobierno; un aprobado raspado como mucho, según la oposición.

Estos objetivos y las acciones concretas para alcanzarlos forman parte de unos principios generales, que el ministro Matutes resumió al comienzo de la legislatura de la forma siguiente: "una política de Estado caracterizada por la continuidad; la búsqueda de un orden internacional basado en la paz, la democracia, el respeto de los Derechos Humanos y el derecho internacional; la seguridad y la defensa nacionales; la modernización y fortalecimiento económico de España; la protección de los españoles en el exterior; y la proyección de la cultura española con toda su diversidad y riqueza" (OID, 1999). En su giro europeo al centro, Aznar suscribió el 10 de abril de 1999 una declaración con el primer ministro británico, Tony Blair, bautizada por la prensa española como la "receta del centro reformista". Es el compromiso formal más importante del gobierno Aznar a favor del modelo social de mercado y de políticas activas de creación de empleo en la UE. Es continuación de otro documento bilateral sobre el empleo presentado al Consejo Europeo de Viena en diciembre de 1998 y confirma la relación privilegiada establecida por Aznar y Blair. Esa amistad, de la que Aznar presumió tal vez en exceso, no ha ayudado lo más mínimo a avanzar en las negociaciones sobre la soberanía de Gibraltar. En represalia, España vetó en 1999 el ingreso del Reino Unido en el Grupo de Schengen. A Blair y Aznar les ha unido un talante flexible, nada ideológico, la obsesión por los resultados y por el trabajo bien hecho, la edad, la formación jurídica, el reto de la modernización nacional y de la construcción europea, dos esposas inteligentes, un respeto profundo de los valores morales y de la institución familiar, y los desafíos derivados de dirigir países periféricos. Los dos se curtieron en largos eclipses: el de Thatcher en el Reino Unido, el de González en España. Les separaron, sobre todo, dos cosas: Gibraltar, siempre en la sombra, y el hecho de

que Blair cuenta con la mayoría absoluta y, cuando apuesta por algo, lo arriesga todo por conseguirlo. El Úlster es un buen ejemplo. Aznar ha dependido de los nacionalistas para gobernar y no se ha atrevido a ir tan lejos en el País Vasco.

A pesar de todo, la imagen de José María Aznar en Europa, al final de su primer mandato, es bastante más positiva que en España. Sirva de botón de muestra la opinión del Times londinense: "España está considerada por los diplomáticos europeos el miembro de la UE que defiende con más firmeza, superando incluso a Francia, sus intereses nacionales. Son pocos los asuntos por los que se apasiona, pero cuando ve en alguno *un interés nacional vital* se planta y casi siempre gana" (Kaletsy, 1999). Y añade: "Su comportamiento inspira profunda admiración, más que resentimiento o mala sangre, entre sus socios europeos". Como ejemplos, cita las batallas por los fondos de cohesión y la armonización fiscal. No es casualidad que las relaciones de Aznar con el canciller alemán, Gerhard Schroeder, hayan pasado por momentos de gran tensión. Los dos pulsos principales citados por el *Times* los ha

librado Aznar con Schroeder y en los dos, por ahora, ha salido ganando Aznar. El secreto, para el diario británico y para los observadores más veteranos de Bruselas, es simple:

*“Tras varios años de letargo, la diplomacia real recibió un fuerte impulso con las visitas de los Reyes al sur de África y a Cuba”*

"España es un caso especial. Cuando disiente, la Comisión y el Consejo de ministros comprenden que no merece la pena luchar. Simplemente guardan sus propuestas. A cualquier lugar que vayas en Bruselas, España ha impuesto la sumisión preventiva". El método que describe refleja, posiblemente, un estilo personal del ministro Abel Matutes y de su secretario de Estado, Ramón de Miguel, ambos curtidos en la política comunitaria antes de asumir la dirección de la política exterior española en 1996. Con ese método, eficaz aunque no suele granjearse muchos amigos, se salvaron temporalmente los fondos de cohesión en la Agenda 2000, y en la cumbre de Colonia se dieron los primeros pasos concretos hacia una futura Europa de la defensa bajo la dirección de Javier Solana, sin duda el político español del año por su coordinación de la guerra de Kosovo como secretario general de la Alianza Atlántica y su nombramiento, en Colonia, como el primer *señor PESC* o Alto Representante para

la Política Exterior y de Seguridad de la UE con el apoyo formal, en ningún caso entusiasta, del gobierno Aznar. Aunque lo aceptó como mal menor, tampoco Romano Prodi fue el candidato ideal de Aznar para presidir la Comisión Europea. Más allá de que tengan o no carisma y capacidad de liderazgo, cada día es más difícil que los presidentes y/o jefes de gobierno europeos, no digamos sus ministros, brillen con luz propia en política exterior cuando buena parte de las competencias externas y de seguridad se han cedido a organizaciones internacionales o se ejercen en equipo.

En el marco de la Política Exterior y de Seguridad Común PESC, España hizo suyos y en ocasiones promovió (proceso de paz en Guatemala, el juicio de disidentes cubanos, la violencia en Colombia, el referéndum aplazado de nuevo en el Sáhara Occidental y el último *pucherazo* en las elecciones de Guinea Ecuatorial) la aprobación de 94 comunicados de política exterior de la UE del 1 de enero al 15 de octubre de 1999. En dicho período el ministerio de Exteriores emitió también 21 comunicados españoles. Una lectura rápida de todos ellos -rara vez pasan de quince o veinte líneas- da una idea bastante precisa de las prioridades temáticas y geográficas de los Quince: la paz, los Derechos Humanos y la democracia en África, Asia, el antiguo bloque soviético y, muy en tercer lugar, Iberoamérica. Los llamamientos a la paz y al diálogo en la guerra de la República Democrática del Congo, que no ha cesado a pesar de los acuerdos de julio en Lusaka, se llevaron la palma: siete comunicados nada menos. A la crisis en Serbia y Bosnia dedicaron cinco, los mismos que a la guerra entre Etiopía y Eritrea, reactivada con gran virulencia en 1999, y a Timor Oriental, ex colonia portuguesa ocupada por Indonesia desde 1975 que, tras el referéndum de autodeterminación del 30 de agosto y la violenta reacción de las milicias proindonesias, quedó bajo control de una Fuerza Internacional y de una misión civil de la ONU. España se limitó a pagar la parte correspondiente vía ONU y UE, y a ofrecer una unidad de Guardias Civiles para la pacificación. La mitad, aproximadamente, de los comunicados españoles fueron simples anuncios de viajes de los Reyes o del presidente del gobierno al extranjero o de dirigentes extranjeros a España. El más importante de todos fue, sin duda, el de la visita de Estado del presidente francés, Jacques Chirac, a primeros de octubre.

El Consejo Europeo de Tampere, convocado a mediados de octubre para fijar los cimientos de

un verdadero espacio judicial europeo, fue tan generoso en ilusiones como pobre en resultados, lo que ensombreció un poco la principal iniciativa europea de Aznar en los últimos meses. En Helsinki, en diciembre, los Quince aceptaron abrir negociaciones con otros cinco países, concedieron a Turquía el estatuto de candidato y -por las presiones de España, entre otros- optaron por una reforma institucional de mínimos en la Conferencia Intergubernamental convocada para el año 2.000. La primera visita oficial a Rusia de Aznar en mayo coincidió con la guerra de Kosovo y con una de las intermitentes crisis de gobierno en el Kremlin. La anulación de la entrevista del jefe de gobierno español con Borís Yeltsin por las autoridades rusas fue un desgaste de imagen innecesario, que podía haberse evitado fácilmente anulando el viaje. El error aceleró el relevo del embajador español en la capital rusa y enfrió las relaciones entre Moscú y Madrid a pesar de todos los esfuerzos de Matutes y del ministro ruso, Ígor Ivanov, gran conocedor de España, por limar asperezas. Se realizó, por fin, el histórico viaje de los Reyes a Cuba, pero a la sombra de la cumbre iberoamericana y en un ambiente poco favorable, enrarecido por un endurecimiento de la situación política interna, críticas muy duras de Aznar desde Honduras contra el régimen de Fidel Castro y problemas de chaqueta y protocolo por las calles de la Habana en los que algunos quisieron ver nuevas tensiones o desencuentros entre Moncloa y Zarzuela, y entre Madrid y La Habana. Aznar aprovechó las principales conferencias en la cumbre de 1999 -la OTAN en abril en EEUU, UE-América Latina en junio en Brasil, la iberoamericana en Cuba en noviembre y la de la OSCE (Organización de Seguridad y Cooperación en Europa) en Turquía también en noviembre- para impulsar las relaciones bilaterales con los países anfitriones y sus vecinos.

### Los desafíos<sup>1</sup>

Termina el siglo XX con una España que, desde el establecimiento de la democracia, ha recuperado mucho del peso internacional perdido desde comienzos del siglo XVIII. Su influencia es, probablemente, bastante superior a la imagen que de la proyección exterior española tenemos los españoles, influidos todavía por tres siglos de introversión y aislamiento, voluntarios en ocasiones e impuestos en otras. Dos retos del nuevo siglo serán reducir cuanto antes esa brecha entre la per-

cepción y la realidad, y hacer comprender a dirigentes y electores que, para defender eficazmente los intereses propios en la sociedad internacional, hay que estar dispuestos a pagar el precio necesario. Falta iniciativa, reflexión y presencia de España en la construcción de la Europa política y de defensa, el desafío más importante en el umbral entre dos siglos. Se necesita más protagonismo y menos reacción, sobre todo en el eje franco-alemán y, quizás, británico. Para ser actor de primera fila -"estar en el pelotón de cabeza" en palabras mil veces empleadas por Aznar y sus antecesores- y no mero acompañante en el proceso, hay que estar en el núcleo duro o en los grupos de contacto que, diferentes para cada conflicto o ámbito de decisión, están sustituyendo para bien o para mal a las viejas instituciones. No basta el puro voluntarismo que tan buenos resultados ha dado a España en el pasado. Se necesitan medios y capacidad de reflexión, y España no anda sobrada de ellos.

Sería un grave error dejarse arrastrar por algunas tendencias neoaislacionistas o nacionalistas, sobre todo en Estados Unidos, que se alejan del marco de la ONU. Para una potencia media como España, con una democracia todavía relativamente joven, la presencia y participación creciente en las instituciones de la ONU, comenzando por el Consejo de Seguridad, son una póliza de autonomía. Como lo es también la participación activa en las operaciones de mantenimiento de la paz, al margen de la influencia positiva que la experiencia tiene para nuestras Fuerzas Armadas, cuya imagen ante la opinión pública han contribuido decisivamente a mejorar. Al final de 1999 España tenía desplegadas 3.470 personas (3.144 militares y 30 policías y Guardias Civiles) en Kosovo (KFOR), Bosnia (SFOR) Croacia, Guatemala, Georgia, Alto-Karabaj y Timor. En este mismo marco de solidaridad debe incluirse la aspiración de contribuir a una defensa más firme de los Derechos Humanos en todo el mundo. Como el primero de ellos es el derecho a la vida, es necesario tratar de lograr la abolición de la pena de muerte en los 36 estados donde todavía es legal y que el 0,7% de nuestro producto interior bruto (PIB) se destine a la cooperación internacional por difícil que resulte a corto plazo. En 1999 los esfuerzos de la diplomacia española se concentraron en evitar la ejecución de Joaquín José Martínez, condenado a muerte en Florida, y de Nabil Nanakli, ciudadano español de origen sirio condenado a muerte en Yemen.

España será miembro de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU durante el trienio 2000-2002. Apoyó el proyecto de una Carta de Derechos Fundamentales de la UE, que debe estar redactada en diciembre 2000, y un español, Álvaro Gil-Robles, fue elegido en 1999 Comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa. La Carta europea no será la Constitución europea que muchos reclaman, pero deberá incorporar y codificar lo esencial de las constituciones de los Quince y toda la jurisprudencia en materia de Derechos Humanos del Tribunal de Justicia de la UE. La respuesta de los españoles a las principales catástrofes humanitarias de los años noventa demuestra una opinión general dispuesta a ayudar con todos los medios posibles. La Ley de Cooperación Internacional que entró en vigor el 8 de julio de 1998, aprobada por consenso parlamentario, reconoce en el ministerio de Asuntos Exteriores la dirección de la política de cooperación y la coordinación de los órganos de la Administración que actúan en este ámbito. Da, además, una responsabilidad especial al Congreso de los Diputados como representante principal

*“Falta iniciativa, reflexión y presencia de España en la construcción de la Europa política y de defensa, el desafío más importante en el umbral entre dos siglos”*

de la sociedad civil. Esa dirección y esa coordinación no se habían puesto todavía en funcionamiento a comienzos del año 2000. “Por segundo año consecutivo, España superó en 1999 la media de la ayuda oficial al desarrollo de los países del Comité de Ayuda al Desarrollo (CAD) de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), formado por los once primeros donantes, declaraba el secretario de Estado para la Cooperación Internacional, Fernando Villalonga, en el Parlamento el 7 de octubre. Calculó en unos 220.000 millones de pesetas el montante de la ayuda *ejecutada* a lo largo del año.

En su balance de legislatura, el 17 de diciembre, Rafael Estrella, portavoz del PSOE en la Comisión de Exteriores del Congreso de los Diputados, calificaba de gris -"ni catastrófica ni negra, simplemente gris"- la política exterior del gobierno. "Ha ido perdiendo peso", declaraba el secretario general y candidato socialista a la presidencia del gobierno, Joaquín Almunia, el mismo día en un almuerzo en el Club Internacional de Prensa. "En Europa ha primado más la reivindicación que la definición de objetivos... En América Latina ha habido una cesión de com-

petencias al secretario de Estado de Cooperación, quien ha ejercido mucho más de representante de su partido y de algunas grandes empresas que de los intereses generales de España". En su intervención en la Conferencia de Política Exterior del PSOE, el 29 de noviembre de 1999, el ex presidente del gobierno, Felipe González, denunció que "se está fagocitando la política exterior española por abajo y por arriba". Según González, "España está perdiendo relevancia en todos los frentes, el Ejecutivo del PP está aplicando una política exterior oligárquica y caciquil, y está recurriendo a empresarios para resolver problemas políticos... El ministro Abel Matutes es una buena persona, pero ha dejado de contar en la escena internacional". No parece una crítica muy justa si se tiene en cuenta la activa intervención personal de González, en sus años de jefe de gobierno, para promover los intereses empresariales españoles en Iberoamérica, Portugal y Marruecos. Separa artificialmente intereses políticos y económicos que casi nunca están separados y resucita reflejos anticapitalistas rancios, más propios de las viejas economías de planificación central que de una economía moderna y social de mercado. En su defensa, el ministro de Exteriores, Matutes recordó de nuevo que, según las encuestas, "la opinión pública valora positivamente la acción exterior del gobierno"<sup>2</sup>. A quienes critican desde la oposición la ausencia de grandes parámetros de la política exterior del PP, Matutes respondió: "Nunca se me propuso el estudio de esos grandes parámetros y no he llegado a ver en qué se han desviado de los anteriores"<sup>3</sup>. El presidente de la Comisión de Exteriores y dirigente del PP, Javier Rupérez, está convencido de que, más allá de los discursos electoralistas y de las diferencias coyunturales, en las cuestiones prioritarias de la política exterior existe una coincidencia general.

Llama la atención el exceso de retórica y la falta de concreción en los dirigentes de los dos partidos principales cuando anticipan el futuro. "El PP se ha fijado, como uno de sus objetivos más importantes, convertir a España en uno de los países más importantes y mejores del mundo en el siglo XXI", declaraba el presidente del gobierno, José María Aznar, en la clausura del Congreso del PP, el 11 de octubre, en Madrid. "El PSOE apuesta por una política europea ciudadana, más Europa, una globalización con contenido moral, encabezar actuaciones para recuperar el papel de las Naciones Unidas y lide-



rar la lucha contra la criminalidad organizada", respondía Almunia a preguntas del autor de este informe al final de la Legislatura.

"En los fines y objetivos de la política exterior española sigue habiendo un consenso básico con el PSOE", asegura José María Robles Fraga, portavoz del Grupo Popular en la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso. "En el día a día resulta difícil porque existe una falta de diálogo clara y de ejercicio responsable de la oposición" (declaraciones a *ABC*, 25-5-99, p. 32). Su opinión coincide con el análisis global de Esther Barbé (1999) sobre la política europea de España. En opinión de Robles, los cuatro objetivos principales de España en política exterior en 1999 fueron "la paz en los Balcanes y la neutralización de la amenaza que suponen las acciones de exterminio étnico; la construcción de la unión política europea, reforzando el papel de Europa en la relación transatlántica; el aumento de nuestra presencia en el norte de África para impulsar la estabilidad en la región, y la construcción de la Comunidad Iberoamericana de naciones, que es la mejor manera de que España tenga en el resto del mundo una mayor presencia" (Barbé, 1999). Algunas reformas institucionales ayudarían a defender mejor esos y otros objetivos. El ministerio de Asuntos Exteriores debería incluir sin demora en su organigrama, además de las dos secretarías de Estado actuales (Política Exterior y para la Unión Europea, y Cooperación Internacional y para Iberoamérica), la secretaría general de Comercio Exterior. Se podría hacer depender de una de las secretarías de Estado ya existentes y asumiría las actuaciones relativas a FAD (Fondo de Ayuda al Desarrollo), FED (Fondo Europeo de Desarrollo), condonación de la deuda e Instituciones Financieras Multilaterales. Urge también modificar el sistema de ascensos y nombramientos en el cuerpo diplomático, que tradicionalmente ha primado la antigüedad sobre la especialización y la eficacia.

Para adaptar la política exterior al nuevo contexto internacional, en especial a la globalización, y defender los intereses nacionales en el extranjero con eficacia se necesita un ministerio de Asuntos Exteriores que abarque todas las competencias propias de la política exterior, una política de Estado. Sólo así podrá aprovechar España sus posibilidades de potencia media en el concierto internacional, bien directamente, bien a través de las organizaciones internacionales a las que pertenecemos. Los objetivos están bastante definidos y cuentan con el respaldo de la inmensa ma-

yoría de los diputados: apoyo firme al proceso de integración europea y a la cooperación internacional para el desarrollo; difusión activa de la cultura de España y de cada una de sus autonomías; alcanzar el 0,7% del PIB para ayuda al desarrollo en la legislatura 2004-2008; formar la zona de libre comercio en el Mediterráneo en el 2010 tal como se acordó en la Conferencia de Barcelona de 1995; desarrollar la Ley de Prohibición de Minas Antipersona y la Ley de Transparencia del Comercio de Armas lo antes posible; reforzar la acción de lucha contra la pobreza, el racismo y la xenofobia; y aplicar los principales tratados, acuerdos, protocolos y convenciones internacionales para la preservación del medio ambiente y la defensa de los Derechos Humanos. La estrategia global de política exterior y de seguridad de España que siguen reclamándonos sin éxito nuestros principales aliados y socios, sobre todo Francia, deberá incluir un esfuerzo más serio en defensa de la educación universal y gratuita para todos los niños del mundo en 2015; la elaboración de un plan nacional para la condonación y el alivio de la deuda, y propuestas que vayan más allá de la Ayuda Oficial al Desarrollo y se integren en una versión más amplia de la política exterior. Deben tenerse en cuenta de forma sistemática y rigurosa el impacto social y medioambiental de los acuerdos de libre comercio, las nuevas tendencias del comercio exterior mundial, el avance en el control de armamentos y desarme, la influencia creciente de la sociedad de la información, la necesidad de apoyar a nuestras empresas en el exterior y la mediación en conflictos. Para avanzar en esa dirección el ministro de Asuntos Exteriores debería contar con una secretaría de Estado responsable de los asuntos europeos, iberoamericanos y de política exterior en general, y otra que se ocupe en exclusiva de la Cooperación Internacional para el Desarrollo, el Comercio Exterior y las relaciones multilaterales. De esta segunda secretaría deberían depender los organismos públicos Instituto Cervantes, Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI) e Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX). El Servicio Exterior, dependiente hasta ahora de la subsecretaría del Ministerio, deberá adaptarse al nuevo organigrama en las Embajadas y Representaciones Permanentes en el extranjero. Una Ley del Servicio Exterior, de la que se han hecho varios borradores pero que nunca ha visto la luz, tendría que recoger y legalizar esta nueva organización.

## El socio mayor de España

“Socio fundamental”, “socio mayor”, “país ejemplar que ha recuperado su *grandeur*”... No ahorró alabanzas ni gestos de reconciliación Jacques Chirac en su viaje del 2 al 5 de octubre de 1999, la primera *visita de Estado* de un presidente francés a España desde 1913. Raymond Poincaré buscaba entonces aliados contra la Alemania post-Bismark. Chirac busca hoy aliados para la gran Europa de la posguerra fría. “Hay que hacer frente al unilateralismo de EEUU”, señala Pascal Boniface, director del Instituto de Relaciones Internacionales y Estratégicas de París (IRIS) en su último informe anual, publicado el último día de la visita de Chirac a España. Asesor áulico de varios presidentes franceses, Boniface denuncia que Washington intenta cambiar las *reglas del juego* mundial en solitario: sigue bombardeando Irak sin mandato alguno, se niega a firmar el tratado que prohíbe las minas antipersonas, rechaza el nuevo Tribunal Penal Internacional, su Senado se

niega a ratificar el tratado contra las pruebas nucleares, regatea desde hace años su cuota

“La respuesta de los españoles a las principales catástrofes humanitarias de los años noventa demuestran una opinión general dispuesta a ayudar con todos los medios posibles”

a la ONU, recorta año tras año su ayuda al desarrollo y pasa olímpicamente de los acuerdos de protección internacional del medio ambiente.

En esa cruzada Francia necesita refuerzos. El eje franco-alemán y la *force de frappe* se han quedado co-

jos. Gerhard Schroeder no es

Helmut Kohl. Rusia no sirve de contrapeso y China queda demasiado

lejos. “España es para nosotros un socio mayor no sólo en Europa sino también en el

Mediterráneo y en el resto del mundo”, dijo Chirac ante el Parlamento español el 5 de octubre. La nueva asociación, en la que algunos ven nada menos que el cuarto *pacto de familia* en las relaciones bilaterales, echó a andar a comienzos de los ochenta. Se institucionalizó con los seminarios bianuales desde 1985 y las cumbres anuales a partir de 1983. Recibió un fuerte impulso con el ingreso de España en la todavía Comunidad Europea en 1986 y se ha consolidado gracias, sobre todo, a la creciente colaboración francesa en la lucha contra ETA a partir de 1991.

“El proyecto de ETA es un proyecto terrorista y, para mí, carece de legitimidad”, declaró Chirac en las Cortes. “No distinguimos entre terroristas

y mantenemos una cooperación ejemplar, sin reservas”. A la hora en que hablaba, un tribunal de París condenaba a 11 miembros de ETA militar a penas de dos a nueve años de cárcel y la policía francesa había detenido ya a 11 personas por el robo de ocho toneladas de explosivos el 28 de septiembre anterior en Bretaña. “La cooperación funciona correctamente y va a durar”, señaló José María Aznar. El director general de la Policía española, Juan Cotino, reconocía en Radio 1 que todavía se puede mejorar. Con 3.000 empresas francesas ya en España, 500 españolas en Francia, intercambios anuales por valor de unos 7 billones de pesetas e inversiones francesas de 413.647 millones en 1998, Chirac quiere más: proyecto conjuntos en Iberoamérica, más fusiones de EEUU en la nueva ronda comercial que intentó abrirse sin éxito en diciembre en Seattle, el tren de alta velocidad para el 2004, el túnel de Somport, el enlace ferroviario Pau-Canfranc y, sobre todo, una plataforma cultural global (basada en el francés, el español y el portugués) y una verdadera política exterior y de seguridad europea. Aznar aceptó las últimas propuestas francesas -comité de representantes políticos, comité militar, Estado Mayor conjunto, conversión del Eurocuerpo en Fuerza de Acción Rápida y capacidad autónoma de defensa-, y propuso “un núcleo motor” si otros miembros de la UE no quieren. “Todo sin debilitar los lazos transatlánticos”, advirtió. Van más lejos o más deprisa de lo que el flamante primer Sr. PESC, Javier Solana, considera desde su relación única con EEUU, prudente o posible por ahora. Hay acuerdo en resistir una baja generalizada y continua de los precios agrícolas, defender la preferencia comunitaria y apostar por zonas de libre comercio con el Mediterráneo e Iberoamérica. Aznar le brindó su apoyo a una nueva cumbre del Mediterráneo durante la presidencia francesa de la UE, en el segundo semestre de 2000, y Chirac respaldará una cumbre UE-Iberoamérica en España en la próxima presidencia española, en el 2002. El presidente francés es consciente de que la democracia y la prosperidad españolas dentro de la UE y la lucha contra ETA son la medicina milagrosa que, en palabras de Hubert Vedrine, ministro francés de Exteriores, “ha terminado con todos los contenciosos”. Para celebrarlo, quiere al Rey Juan Carlos a su lado, presidiendo el 14 de julio del 2000 en París, la fiesta nacional francesa y los 25 años de Su Majestad en el Trono.

### De Berlín a Helsinki

Para José María Aznar, 1999 fue un año difícil por la dimisión de la Comisión y la guerra de Kosovo, pero “extraordinariamente fructífero para Europa y para los europeos” (*El Mundo*, 26.12.99). Resume esos frutos en la entrada en vigor del euro, la aprobación de la Agenda 2000 (presupuestos de la UE para 2000-2006), el comienzo de una política exterior y de seguridad europea, instrumentos para luchar más eficazmente contra la delincuencia organizada y luz verde para ampliar el número de candidatos al ingreso a otros cinco países del Este (Letonia, Lituania, Eslovaquia, Bulgaria y Rumanía), Malta y Turquía, aparte de los seis con negociaciones abiertas desde el 1998: Eslovenia, República Checa, Hungría, Polonia, Estonia y Chipre. En opinión de Aznar, el euro ha proporcionado a España la estabilidad necesaria para crecer equilibradamente y generar cientos de miles de puestos de trabajo y ha permitido, por vez primera en muchos años, imaginarse un horizonte de pleno empleo en la próxima década. Para él, la Agenda 2000, aprobada en la cumbre de marzo en Berlín, es “un éxito para Europa y para España” que permite modernizar nuestra agricultura y mantener los Fondos Estructurales y de Cohesión. Según el presidente, esos fondos “alcanzan la nada desdeñable cifra de cerca de 10 billones de pesetas en los próximos siete años”. Para el líder de la oposición Joaquín Almunia, manteniendo “el presupuesto negociado en 1992 por el llamado pedigüño (Felipe González), podíamos estar recibiendo 1,4 billones de pesetas más de lo que recibimos” (*Diario de Sesiones*, 1999b). Aunque Aznar insistió en que había logrado un acuerdo mejor para España que el de González, los Fondos de Cohesión para 2000-2006 se redujeron de 21.000 millones de euros a 18.000 millones y los Fondos Estructurales, que Alemania y otros contribuyentes netos querían limitar a 200.000 millones de euros para los siete próximos años, se limitaron finalmente a 213.000 millones. Cierto que España pasa a recibir el 62% de los Fondos de Cohesión y hasta 1999 sólo recibía el 55%, pero el precio político pagado por ello puede lastimar durante años la política europea española.

Calla Almunia que el propio González, en conversaciones privadas dos años antes de dejar Moncloa, reconocía ya como inevitable lo que es obvio: la pérdida gradual de las ayudas a medida que se avance en la ampliación y se reduzcan las

diferencias en renta con los países más ricos. Según la Comisión Europea, el efecto acumulado de los Fondos ha aumentado en un 4% el producto interior bruto (PIB) de España en los últimos 10 años. Observadores neutrales (White, 1999) destacan que España, con González y con Aznar, ha sido el país de la UE que más ayudas ha recibido en 1999 en términos absolutos (1,2 billones de pesetas) y también con un superávit más elevado en sus transacciones con Bruselas (1,06 billones de pesetas, alrededor del 1,2% de su PIB). En contra de los deseos de España, la UE mantiene para los próximos siete años el mismo techo de gasto comunitario, el 1,27% del PIB de la Unión. La Agenda 2000 aprobada en Berlín reduce tanto el porcentaje como el volumen absoluto de las ayudas estructurales y aumenta, tanto en términos absolutos como relativos, los gastos de la Política Agrícola Común (PAC): en 1970 representaban el 86,9% del total, en 1999 representaron el 47% y en 2006 ascenderán al 49,4%. Es un aumento justificado por la disminución prevista de los precios agrícolas, en línea con la tendencia de los mercados internacionales, que será compensada con pagos directos a los agricultores (Lázaro, 1999).

Con la Agenda 2000 se rompió una tradición importante: la UE siempre había reforzado las medidas de solidaridad en cada nueva ampliación y profundización. La PAC acompañó a la Unión Aduanera, el Acta Única coincidió con los Fondos Estructurales, y la Unión Monetaria con los Fondos de Cohesión. Es evidente que la UE, con los presupuestos aprobados, no puede reforzar la solidaridad ni la cohesión y es más que dudoso que pueda garantizar también el éxito de la ampliación al centro y este de Europa. Aznar consiguió mantener por unos años más los fondos, pero corrió el peligro de dejar a España aislada, fuera del tren franco-alemán. Ese debilitamiento estratégico, de confirmarse, es el resultado, sobre todo, de ser el único dirigente conservador, junto con el primer ministro luxemburgués, del Consejo Europeo tras la salida del gobierno del belga Jean Luc Dehaene. Aznar ha intentado neutralizar este peligro con un eje atlántico Madrid-Londres siempre amenazado por los vientos gibraltareños, el apoyo firme al proyecto Schroeder-Jospin-Blair de una defensa europea autónoma, un cuidadoso trato del vecino portugués, aproximaciones a Atenas y Ankara para ayudar a superar los litigios históricos del Mediterráneo Oriental, un intento muy

difícil de abanderar el centro derecha en una UE con catorce gobiernos de centro izquierda tras la crisis belga de 1999 por la contaminación de los piensos con dioxinas cancerígenas, e iniciativas como la cumbre de Tampere, en octubre, para promover el llamado espacio de libertad, seguridad y justicia.

Tanto el gobierno como la oposición en España presionaron sin éxito para evitar la dimisión de la Comisión Santer y aceptaron a Romano Prodi en la presidencia como mal menor. A pesar de las diferencias iniciales y de una ausencia clara de *química* en sus relaciones con el ex primer ministro italiano, Aznar logró mejorar las competencias de los dos nuevos comisarios españoles, Loyola de Palacio y Pedro Solbes, y, aunque con meses de retraso, consiguió retener dos direcciones generales –una de ellas nada menos que en Agricultura– en el nuevo Ejecutivo comunitario. En la crisis más grave de la Europa comunitaria, José María Aznar, consciente de la importancia que tiene una Comisión fuerte para un país medio como España, apoyó a la Comisión frente al

Parlamento Europeo y descalificó –“ni sabio ni riguroso” según Matutes– el informe del *Grupo de Sabios* sobre las acusaciones de fraude, mala gestión o nepotismo.

El socialista español Manuel

Marín salió con el expediente completamente inmaculado

frente a tantas acusaciones sin fundamento y a su

antecesor al frente de los programas MEDA (de apoyo a

países mediterráneos), Matutes, se

le atribuyó una “responsabilidad más pesada y clara” sin involucrarle tampoco

en fraude alguno. El único español que formó parte del Comité de Expertos Independientes o

*Grupo de Sabios* fue el catedrático de Derecho Internacional Público de Sevilla Juan Antonio Carrillo Salcedo. Como presidente todavía del Parlamento Europeo, José María Gil-Robles, discrepó públicamente de Aznar y defendió tanto la campaña de acoso y derribo contra la Comisión como el informe de los cinco *sabios*.

En el Consejo Europeo de Colonia, los días 3 y 4 de junio de 1999, se nombró a Javier Solana primer *señor PESC*, se acordó la integración paulatina de la Unión Europea Occidental en la UE y se fijó el plazo de año y medio para dotar al segundo pilar de una capacidad europea creíble de seguridad y defensa. Fue la lección principal de la

guerra de Kosovo. Se aprobó también un pacto europeo por el empleo cuyo primer elemento es un proceso de diálogo entre gobiernos, sindicatos y empresarios que debía culminar en la cumbre extraordinaria sobre el empleo convocada para la presidencia portuguesa de 2000 a petición de Blair y Aznar. Como contribución a esta nueva política común europea, los cinco países del Eurocuerpo (Alemania, Francia, Bélgica, Luxemburgo y España) decidieron convertirlo en una fuerza de reacción rápida disponible para acciones de la UE. En noviembre, Javier Solana era elegido también secretario general de la Unión Europea Occidental (UEO) y en el Consejo Europeo de Helsinki, en diciembre, los Quince se dieron tres años de plazo para contar con una fuerza de 15 brigadas (de 50.000 a 60.000 soldados más otros tantos de reserva) a las órdenes de dos comités y de un Estado Mayor europeo. Mes y medio antes, en la recién creada Escuela Superior de las Fuerzas Armadas, en Madrid, Aznar (*El País*, 28-10-99, p. 28) calificaba de “inaceptable” la incapacidad demostrada por Europa en la guerra de Kosovo y advertía que “cualquier moneda que pretenda ser fuerte, y el euro lo pretende, necesita tener un respaldo militar”. Solana tomó posesión de su nuevo cargo el 15 de octubre con el compromiso de convertir la UE en un actor internacional más poderoso. “Europa es decisiva en la formulación de las grandes políticas comerciales, financieras y monetarias”, dijo. “Ya es hora de que sea también una potencia global activa e influyente”. Su primer problema, sin embargo, será definir las competencias del puesto, que en muchos ámbitos se solapan o coinciden con las del presidente de la Comisión, el comisario de Asuntos Exteriores y los ministros de Exteriores de los países miembros.

Para el gobierno español el éxito principal de 1999 en Europa fue la cumbre de Tampere, los días 15 y 16 octubre. Iniciativa de Aznar para impulsar la creación de un espacio de seguridad y justicia europeo, concluyó con la aprobación de 22 páginas de buenos propósitos y un resultado concreto: el establecimiento, antes del 31 de diciembre del 2001, de un nuevo organismo comunitario, Eurojust. Estará formado por fiscales, magistrados y policías de los Quince, y su misión prioritaria será coordinar la lucha contra el crimen organizado. “El terrorismo será uno de los delitos en los que se centrará el fortalecimiento de la cooperación”, afirmó el jefe del gobierno español (*Diario de Sesiones*, 1999c). Si algún día se hacen realidad los objetivos aproba-

“Para el gobierno español el éxito principal de 1999 en Europa fue la cumbre de Tampere”

dos en Tampere, las políticas nacionales de inmigración y asilo se irán aproximando, se suprimirá la extradición entre los Quince y cada miembro reconocerá automáticamente las sentencias de los demás. El Fondo de Solidaridad para Refugiados propuesto por España no prosperó por el veto alemán, pero se aceptó su estudio y en diciembre la Comisión proponía dotarlo de 15 millones de euros (unos 2.500 millones de pesetas) para financiar programas de ayuda a los refugiados (*ABC*, 17.12.99, p. 33). La Conferencia Intergubernamental de 2000, tal como defendió Aznar en Helsinki en diciembre, se limitará a negociar el número de comisarios, una nueva ponderación de voto en el Consejo y un aumento de las decisiones que se aprueban por mayoría. Así se acordó, en contra de los deseos de Prodi de ir a una Conferencia abierta y a una reforma más amplia. Por defender una reforma mínima, Almunia acusó a Aznar de “cicatero” con “una idea estrecha y poco elevada de Europa” y Julio Anguita calificó la política europea del gobierno de “pirotecnia y fuegos artificiales”. Para Aznar, la extensión de las negociaciones de ampliación a 13 candidatos sin calendario es la mejor solución, pues deja abierto el final de la *regata* al que mejor cumpla los criterios, iguales para todos.

### A Kosovo por la OTAN

Fue, en palabras de Ignacio Ramonet, director de *Le Monde Diplomatique*, “la guerra inaugural del siglo XXI”. España se vio arrastrada a ella sin ningún entusiasmo en su nueva condición de aliado de pleno derecho de la OTAN. Participó desde el primer día, el 24 de marzo, en los bombardeos de la operación “Allied Force” con seis F-18, con base en Aviano, Italia, y un avión cisterna, tres fragatas y dos buques de aprovisionamiento. Los F-18 realizaron hasta el final del conflicto, el 10 de junio, un total de 264 salidas (1.014 horas de vuelo) con una eficacia, según el ministro de Defensa, Eduardo Serra, “superior al 80%”. Las fragatas Numancia, Victoria y Navarra realizaron operaciones de apoyo y sus comandantes ejercieron temporalmente de jefes de la guerra antiaérea y de coordinadores de la guerra electrónica. Los buques de aprovisionamiento Marqués de la Ensenada y Patiño realizaron 62 días de mar y proporcionaron apoyo logístico a los buques aliados en el Adriático transvasando más de 19.000 toneladas de com-

bustible para buques y 603 de combustible para helicópteros en 90 maniobras de aprovisionamiento. Aunque no fueron tan decisivas como en la guerra del Golfo, las bases españolas fueron utilizadas activamente durante toda la guerra, igual que las fábricas españolas de armamento, al servicio de los aliados. Diplomáticamente, el gobierno español lamentó desde el principio que la operación no contará con mandato del Consejo de Seguridad y criticó que las decisiones principales se adoptaran en el G-8, donde España no estaba presente. A pesar de ello, Aznar intervino personalmente para mantener la cohesión de los aliados y se desplazó a Washington en abril para coordinar sus gestiones con el presidente norteamericano, Bill Clinton, quien le agradeció públicamente los servicios prestados. El hecho de que un español, Javier Solana, destacado dirigente socialista, fuera el secretario general de la Alianza, facilitó el apoyo parlamentario, con la excepción de Izquierda Unida, a la guerra. La opinión pública española se mantuvo muy dividida. Nueve de cada diez españoles, según las encuestas, consideraron que el presidente yugoslavo, Milosevic, estaba llevando a cabo una limpieza étnica en Kosovo, pero la mitad, aproximadamente, se declaró en contra de la guerra aérea y se opuso en todo momento a una intervención terrestre (*El Mundo*, 04.04.99, p. 6-7). Como toda la oposición, los encuestados calificaron de “insuficiente” la información del gobierno. De hecho, militares y diplomáticos españoles, a diferencia de lo sucedido en el Golfo, recibieron instrucciones de guardar silencio, con lo que los medios españoles se llenaron de opiniones extranjeras. Gracias a voces aisladas, como la del contralmirante Ángel Tello, que se atrevió a hablar, supimos lo que la mayor parte de nuestros diplomáticos y militares pensaba. “Es un desastre en todos los sentidos”, dijo. “Como almirante, creo que se les ha escapado de las manos” (Radio Onda Cero, 16.04.99). La crítica principal de la oposición fue que el gobierno actuó de espaldas al Parlamento, pero fracasó en sus intentos de condicionar futuras intervenciones a la aprobación del Legislativo.

En el pleno del Congreso del 16 de junio, Aznar reconoció que España se había gastado en la operación 17.377 millones de pesetas, más de 10.000 de ellos en ayuda humanitaria gestionada por cuatro ministerios: Exteriores, Trabajo, Defensa y Sanidad. Para la reconstrucción comprometió 7.000 millones más en créditos FAD,

aparte del 6,9% de los 282 millones de euros comprometidos por la Unión Europea, 2.000 millones de la Agencia de Cooperación y más de 1.000 millones aportados por las Comunidades Autónomas. A estas cantidades habría que añadir la acción de las ONG, que ascendió a más de cien millones, y los donativos, de unos 1.500 millones. “No hemos luchado para hacer un Kosovo independiente sino para lograr sociedades multiétnicas”, aseguraba Aznar al final de las operaciones. No parece que la realidad de hoy en Kosovo se ajuste demasiado a sus deseos. “Si la Alianza hubiera fracasado, habría desaparecido y no se me ocurre un escenario peor para empezar el siglo XXI” (Aznar, 1999). Añadía que nada de lo hecho por España se puede entender sin la apuesta europea y resumía en cuatro puntos las lecciones aprendidas: la importancia de preservar la cohesión de los aliados, la obligación de los europeos de hacer más seguridad en vez de hablar tanto de la que hacen otros (EEUU), lo esencial que es mantener el vínculo transatlántico y la condición indispensable de reforzar la cooperación entre la OTAN y Rusia. España, de nuevo con la única oposición de Izquierda Unida, hizo suyas las decisiones de la cumbre de la OTAN en Washington en abril, en particular el nuevo concepto estratégico, que, según el propio Solana “codifica el comportamiento de la Alianza en Bosnia y en Kosovo” (Aznar, 1999). Se puede decir más alto, pero no más claro. La estrategia de la OTAN, mucho más que cualquier otra razón política o humanitaria, determinó la intervención militar contra Serbia. “Las misiones previsibles de la OTAN en el futuro ya no son del artículo 5 sino de la proyección de fuerza, donde lo esencial es qué se tiene y qué es lo proyectable”, dice Javier Conde, embajador español en la Alianza. “Es la discusión clave del futuro, de la que España no puede quedar al margen” (Aznar, 1999). Sobre el polémico *peso de España*, que sólo puede entenderse ya en clave interna, Conde es rotundo: “España pesa en la OTAN lo que pone, es decir, el 3,5% de los presupuestos. Si se quiere pesar más, habrá que pagar más”.

El 1 de septiembre se activaba el Cuartel General Subregional Conjunto de la Alianza Atlántica, con sede en Retamares (Pozuelo de Alarcón, Madrid). Veintinueve días después, lo

inauguraban el presidente Aznar y el todavía secretario general Javier Solana. Alberga a 313 personas -39 de ellas civiles y unos cien militares españoles-, de doce naciones, al mando de un teniente general español, en la actualidad Juan Narro Romero. Paralelamente, España aceleró en 1999 la cobertura de otros 163 puestos destinados a militares españoles en los restantes cuarteles de la OTAN. Además del cuartel de Retamares, España albergará un Centro de Operaciones Aéreas aliado -el número 8- en la base aérea de Torrejón de Ardoz. El 26 de noviembre tomaba posesión como nuevo comandante en jefe del Eurocuerpo el general español Juan Ortuño. En sus primeras declaraciones confirmó la disposición y capacidad de esta fuerza europea de asumir en el año 2000 el mando de la Fuerza de Paz en Kosovo si la OTAN lo autoriza. “(El Eurocuerpo) tiene que ser capaz de actuar solo, pero sabiendo que normalmente actuará en el marco de la OTAN y para ello tendrá que adaptarse desde hoy al esquema básico de la OTAN”, dijo Ortuño (*El País*, 15.11.99). España participa en la Fuerza Internacional de Kosovo desde el final de la guerra con un batallón de 1.200 soldados: 660 legionarios, una unidad de zapadores, otra unidad de operaciones especiales, un equipo de control aerotáctico, otro de cooperación cívico-militar y 330 militares de apoyo logístico y médico. La Legión fue sustituida a finales de diciembre y en las primeras semanas del 2000 por la III Brigada Paracaidista. Esta fuerza está integrada en la llamada Brigada Multinacional Oeste de la KFOR, dirigida por Italia. Con la experiencia de Bosnia, España considera que las elecciones en Kosovo sólo deben celebrarse cuando se den las condiciones técnicas y políticas, se opone a la independencia del territorio y defiende el levantamiento del embargo contra Serbia porque, igual que en Irak, castiga a la población civil y refuerza o consolida al régimen de Milosevic.

#### Por fin en La Habana

Un rey, dieciséis presidentes, un primer ministro y cinco delegados presidenciales de 21 países asistieron el 16 de noviembre en La Habana a la novena cumbre iberoamericana. Cuba no había recibido tantos dignatarios extranjeros desde la conferencia de los no alineados de 1979. Nunca en la historia un monarca español había puesto los pies en la *Perla de las Antillas*. “No se dan las circunstancias necesarias y conve-

“Para el gobierno español el éxito principal de 1999 en Europa fue la cumbre de Tampere”

nientes para una visita oficial", declaró el presidente del gobierno español, José María Aznar, al final de la cumbre. Las visitas oficiales de los Reyes y del presidente español tendrán que esperar, pues, a que cambien las condiciones dentro de Cuba o la opinión del gobierno español. "Ir por primera vez a Cuba como Rey de España, mezclado con otros jefes de Estado y en un momento muy difícil por la situación de Pinochet, no ha sido lo más adecuado", declaraba el día 15 en Albacete Sabino Fernández Campo, jefe de la Casa Real de 1977 a 1993. Añadió que la visita de los Reyes tendría que haberse organizado aparte de la cumbre y en fechas anteriores para que llegasen solos. A pesar de las críticas, Aznar consideró un éxito los resultados. Sacar adelante el encuentro en la capital cubana y defender la democracia y los Derechos Humanos en el único país de Occidente que sigue gobernado por un partido único para el que la democracia parlamentaria es un lujo capitalista, fue tan difícil o más que la puesta en marcha de todo el proceso iberoamericano quince años antes. Desde la primera cumbre, en Guadalajara (México) en 1991, no habían surgido tantos obstáculos para mantener vivo el foro más importante de cooperación entre España, Portugal y 19 países iberoamericanos. El gobierno estadounidense presionó por todos los medios, públicos y privados, para impedir otra victoria diplomática de Fidel Castro, que tiene en las cumbres una válvula de legitimidad exterior renovada cada año. La disidencia del exilio de Miami, dirigida por la Fundación Cubano-Americana, que preside Jorge Mas Canosa (Jr.), y el Comité Cubano de Derechos Humanos, manejado desde Florida por Ricardo Bofill, movilizaron a sus seguidores para provocar otra respuesta violenta del dirigente cubano y la anulación del encuentro. Nunca sabremos si en la decisión de los presidentes chileno, Eduardo Frei, y argentino, Carlos Menem, de no asistir influyó más el proceso de extradición de Augusto Pinochet, como dijeron en su día, o las presiones de Washington. En cualquier caso, enviaron a sus ministros Exteriores y pocos los echaron de menos. Influyó sin duda el hecho de que los dos eran ya prácticamente presidentes en funciones.

Las reuniones de los principales disidentes del interior en libertad -Gustavo Arcos, Elizardo Sánchez, Osvaldo Payá y Raúl Rivero- con 6 de las 21 delegaciones que asistieron a la cumbre y docenas de corresponsales extranjeros ensombrecieron por completo el asunto de Pinochet y el

resto de la conferencia, bautizada con el título "Iberoamérica y la situación financiera en una economía globalizada". "Los que han quedado en ridículo han sido los presidentes que no acudieron alegando que no podrían reunirse con la disidencia interna", decía Joaquín Roy, director del Instituto de Estudios Ibéricos de la Universidad de Miami. Tras los encuentros de Sánchez y los demás con Sampaio, Gutiérrez, Aznar, la mexicana Rosario Green y los medios de comunicación más influyentes del mundo, Roy está convencido de que "el futuro de Cuba se decidirá en el interior de la isla". Fue la única concesión de Fidel Castro, un precio necesario para salvar la reunión. En su discurso inaugural, el anfitrión, de 73 años, se rió de todos los consejos recibidos de medio mundo desde la caída del muro de Berlín, que provocó el desplome de la economía cubana al perder su principal mercado y fuente de ayuda. "Cuba los oye con la sonrisa de la Gioconda y la bíblica paciencia de Job", dijo. En una manipulación bravucona y descarada de la historia, dio por sentado que todo el mundo, menos él, se ha equivocado y reiteró que "Cuba jamás abandonará los caminos de la revolución y de la historia". Todos los presentes defendieron la democracia, aunque cada uno la practique a su manera. En la Declaración final apostaron por una globalización humanizada. Por enésima vez pidieron el levantamiento del embargo estadounidense y condenaron la ley Helms-Burton. Reiteraron la necesidad de soluciones justas y duraderas del problema de la deuda y de un mundo multipolar. Sobre la aplicación extraterritorial de las leyes, el asunto más polémico de la reunión, apenas cambiaron una coma de los textos que venían aprobando desde Viña del Mar (Chile, 1996) hasta Oporto (Portugal, 1998): no a la extraterritorialidad, pero silencio sepulcral sobre Pinochet.

"Rechazamos enérgicamente una vez más la aplicación unilateral y extraterritorial de leyes nacionales que infrinjan el derecho internacional y las leyes de terceros países", señaló el ministro español de Exteriores, Abel Matutes. "Ha sido un gran triunfo para Chile", declaró su colega chileno, Juan Gabriel Valdés, dando por sobreentendido que el texto incluye también acciones como las del juez Baltasar Garzón contra los ex dictadores de Chile y Argentina. En textos separados, los dirigentes iberoamericanos defendieron el diálogo sobre las Malvinas, la paz en Colombia, la reconstrucción en Centroamérica,

negociaciones entre Ecuador y Perú, la devolución del canal a Panamá, una nueva cumbre eurolatinoamericana -continuación de la de Río- durante la presidencia española de la UE en 2002 y la designación del ecuatoriano Oswaldo Guayasamin como "Pintor de Iberoamérica". La decisión más importante se aprobó antes de la cumbre. Se trata del establecimiento de una secretaría de Cooperación Iberoamericana, el primer paso hacia la institucionalización del proceso. A su primer responsable, el mexicano Jorge Alberto Lozoya, no le faltará trabajo. Entre sus misiones estará la coordinación de los más de cincuenta proyectos de cooperación en marcha y la preparación de la cumbre 2000 en Panamá. Sacar de la miseria y alfabetizar a los millones de niños del hemisferio, desafío de dicha cumbre, es infinitamente más importante que seguir deshojando la margarita del postcastrismo.

#### La alargada sombra del Peñón

**“La relación especial entre Aznar y Blair ha servido de poco o nada para avanzar hacia la solución del conflicto de la soberanía sobre Gibraltar”**

La relación especial entre Aznar y Blair ha servido de poco o nada para avanzar hacia la solución del conflicto de soberanía sobre Gibraltar. En la madrugada del 27 de enero de 1999 la Policía naval gibraltareña (*Royal Gibraltar Police*) apresó el pesquero “Piraña” y acusó a sus 14 tripulantes de faenar en aguas gibraltareñas. El ministro de Asuntos Exteriores, Abel Matutes, descartó el día 28 el envío de patrulleras o de barcos de guerra, pero advirtió que si el Reino Unido no garantizaba en 72 horas el pleno cumplimiento del acuerdo pesquero ratificado oralmente por él mismo y el secretario del Foreign Office, Robin Cook, el 5 de octubre de 1998 en Luxemburgo, España intensificaría los controles en la verja. Londres dio la llamada por respuesta y Matutes protestó por escrito el día 29 en términos enérgicos ante el entonces presidente de la Comisión Europea, Jacques Santer, por lo que describió como el incumplimiento sistemático de la legislación europea en Gibraltar ante la indiferencia de los órganos de control de la UE. El ministro español denunció la existencia de unas 50.000 sociedades fantasma en Gibraltar que no rendían cuentas de sus actividades y la no transposición al Peñón de 61 directivas comunitarias, un agujero normativo que, en su opinión, hace de

Gibraltar una economía parasitaria de España, es una invitación permanente a la evasión fiscal y permite el blanqueo del dinero proveniente del narcotráfico. Robin Cook respondió con sarcasmo que, de ser correctas las cifras de Matutes, el 2% del PNB español se esfumaba por Gibraltar. Su embajador en Madrid, Peter James Torry, escribía en *El Mundo* (22.02.99) que España estaba violando el Derecho Comunitario con sus controles en la verja y que casi todas las directivas citadas por España ya habían sido transpuestas, estaban en proceso de serlo o no eran aplicables.

El Tribunal Menor de Gibraltar condenó a los tripulantes a pagar una fianza de un millón de pesetas para volver a sus casas y centenares de pescadores gaditanos bloquearon el paso fronterizo durante el último fin de semana de enero frente a unos 500 gibraltareños que, desde el otro lado de la verja, los insultaban a gritos. El apresamiento del “Piraña” colmó la paciencia del gobierno español, que seguía sin recibir respuesta a las propuestas de soberanía presentadas a Londres en 1997. En dichas propuestas España ofrecía un Estatuto de autonomía muy amplio, libertad absoluta de elección de nacionalidad y un período transitorio prolongado de soberanía compartida para Gibraltar y los gibraltareños. Matutes aseguró que, por el acuerdo oral de octubre de 1998, el Reino Unido debía permitir la pesca en las llamadas aguas en litigio: milla y media en poniente y tres millas en levante próximas al Peñón. Seguía prohibido faenar en las llamadas “aguas del Almirantazgo” o *zona de seguridad militar*: una franja de 200 metros de anchura hacia el interior de la bahía y paralela a los diques de entradas al puerto de Gibraltar. Las autoridades locales gibraltareñas hicieron caso omiso del acuerdo y Londres, igual que sucedió con el acuerdo de 1987 sobre el uso conjunto del aeropuerto, no hizo nada por imponer su cumplimiento. Además de multiplicar aleatoriamente los controles en la verja a partir de entonces, el gobierno español bloqueó en febrero la entrada en vigor de la directiva comunitaria sobre control de seguridad de los aviones extracomunitarios que aterrizan en aeropuertos de la UE y siguió vetando, entre otras iniciativas de Bruselas, el proyecto comunitario sobre las ofertas públicas de adquisición de empresas. Y lo más importante: vetó la adhesión del Reino Unido al Convenio de Schengen, solicitada por Londres en mayo. La sombra del Peñón sigue siendo, como se ve, muy alargada.



A propuesta de Exteriores, el gobierno español nombró por fin en febrero una comisión interministerial, dirigida por el vicepresidente Álvarez Cascos, para promover el desarrollo de la comarca y acabar con la dependencia económica del Peñón de millares de familias del Campo de Gibraltar, pero terminaba el año sin que se vieran otros resultados concretos que los alcanzados el 1 de febrero por las autoridades gibraltareñas y los responsables españoles del sector pesquero de la zona circundante. En mayo, coincidiendo con la visita oficial del ministro principal de Gibraltar, Peter Caruana, a la Diputación de Cádiz, las autoridades gaditanas y gibraltareñas firmaron también un Convenio Marco de Colaboración en educación, cultura, medio ambiente, turismo, deporte y comercio. Matutes considera que, con estas acciones, el gobierno gibraltareño sólo intenta hacer reconocer que tiene capacidad legislativa. “Básicamente (los acuerdos de pesca) son los mismos acuerdos a los que habíamos llegado los gobiernos español y británico el 5 de octubre”, añadió. “El gobierno español no puede reconocer oficialmente este entendimiento. La razón es simple: afecta a cuestiones de soberanía entre el Reino Unido –no las autoridades locales de Gibraltar– y España en aguas en litigio”. El portavoz de Izquierda Unida, Meyer Pleite, le respondía el 10 de febrero en la Comisión de Exteriores del Congreso de los Diputados que, ni en el número de barcos que podrán faenar, ni en la zona autorizada para hacerlo por Gibraltar, el acuerdo con los pescadores coincide con el alcanzado por Matutes y Cook (*Diario de Sesiones*, 1999d). Meyer y los demás representantes de la oposición apoyaron en todo momento lo esencial de la posición española en la reclamación de soberanía, pero criticaron duramente la forma de hacerlo y respaldaron una cooperación creciente entre Gibraltar y las autoridades locales españolas. En la última sesión de la Comisión de Exteriores, el 16 de diciembre, Matutes se despidió pidiendo continuidad en la política de firmeza respecto a Gibraltar y que nunca se aparte la cuestión de soberanía por razones coyunturales o electorales. “Por primera vez en la historia”, añadió, “España ha dejado de ser demandante y son los británicos los que han comenzado a pedir acuerdos”. Aunque el origen de la crisis de 1999 pueda parecer un hecho intrascendente, no lo es. Como nos recordaba el equipo de observadores de la revista *Política Exterior* (Informe semanal, 1999), “con operaciones de esa clase el gobierno de la colonia

pretende acreditar en Europa una personalidad jurídica de la que carece, negando que exista un problema de soberanía entre los gobiernos de Londres y Madrid”.

### Notas

1. Para la elaboración de esta parte del informe he contado con la inestimable ayuda de tres diplomáticos españoles: José María Ferré, enlace del ministerio de Asuntos Exteriores con las Cortes; Jorge Dezcallar, actual embajador de España en Rabat, y Ramón de Miguel Egea, secretario de Estado de Política Exterior y para la Unión Europea.

2. Como fuente, el ministro ha citado en repetidas ocasiones el informe del Instituto de Cuestiones Internacionales y Política Exterior (INCIPE), *La opinión pública española y la política exterior de 1998*.

3. Declaraciones en la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso de los Diputados en respuesta al diputado socialista Rafael Estrella, 17.12.99.

### Referencias bibliográficas

Aznar, J.M<sup>a</sup> (1999) intervención en las jornadas *España-OTAN, 50 años*, organizadas por la Asociación Atlántica Española en el Congreso de los Diputados, 15-16 de julio de 1999.

Barbé, E. (1999) *La política europea de España*, p. 168-177. Barcelona: Ariel.

Calduch Cervera, R. (1993) *Dinámica de la sociedad internacional*, Madrid: Centro de Estudios Ramón Areces, S.A. p. 45-148.

*Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados* (1999a) Comisiones. Asuntos Exteriores. 769/99, p. 22711.

*Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados* (1999b) Pleno y Diputación Permanente, 248/99, p. 13205.

*Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados* (1999c) Pleno y Diputación Permanente, 265/99, p. 14077.

*Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados* (1999d) Comisiones, Asuntos Exteriores, 611/99, p.17803-17808.

*Financial Times Survey* (1999) "World Economy and Finance", 24.09.99, p. XXIV.

"Informe semanal de política exterior" (1999) *Estudios de Política Exterior*, SA, 161/99, Madrid.

Jover Zamora, J.M<sup>a</sup> (1999) *España en la política internacional*. Siglos XVIII-XX, Madrid: Marcial Pons, p. 16.

Kaletsky, A. (1999) "A Rough Guide to Europe". *The Times*, 02.12.99.

Lázaro Araujo, L. (1999) *Política exterior*, 68/99, p. 81-95.

Morán, F. (1990) *España en su sitio*. Barcelona: Plaza & Janés/Cambio 16, y *Una política exterior para España* (1980) Barcelona: Planeta.

OID (1999) *Balance de la política exterior en la legislatura 1996-1999*, Documento interno de la Oficina de Información Diplomática (OID). Sin fecha, se terminó de redactar en las navidades de 1999.

White, D. (1999) "Spain" *Financial Times Survey*, 20.05.99, p. 11.